Javier Cortés Fernández*
Clara Pérez Ureta**

FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO. FONPRODE. UN INSTRUMENTO AL SERVICIO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO

El Fondo para la Promoción del Desarrollo nace con el mandato de ser un instrumento al servicio de la política de desarrollo. Esta configuración del Fondo y su marco legal e institucional le otorga una especificidad respecto al resto de cooperaciones financieras internacionales y nos plantea una serie de debates muy interesantes derivados de la misma. La importancia de la planificación en un instrumento que concilia un amplio espectro de tipos de operaciones y recursos de naturalezas distintas: reembolsables y donación. La importancia de la complementariedad con otros instrumentos para contribuir al impacto óptimo en desarrollo. La incorporación del sector privado a la agenda de desarrollo global y el papel que las instituciones financieras de desarrollo pueden cumplir para generar los incentivos adecuados en el establecimiento de lugares comunes. Estos y otros retos se plantea la cooperación española y el Fonprode, un instrumento que ha de evolucionar a medida que se vaya evaluando su utilidad como instrumento de desarrollo.

Palabras clave: política de desarrollo, planificación, reembolsables, Código de Financiación Responsable, gestión, inclusivo, activo financiero, Busan.

Clasificación JEL: F35.

1. Introducción

La reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) se asume como compromiso por parte de la Secretaría de

Estado de Cooperación Internacional (SECI) en el proceso de aprobación de la Ley Reguladora de Gestión de la Deuda Externa 38/2006, y como tal queda recogida en la Disposición Transitoria Primera del texto de dicha ley.

En diciembre de 2009 se admite a trámite legislativo por Acuerdo del Consejo de Ministros la reforma del FAD, que concluye con la disociación de las dos naturalezas que convivían en la redacción legal del instrumento. Por

* Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

** Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas Universidad Carlos III. Analista Jurídico en COFACE Ibérica.

un lado, la creación del nuevo Fondo para la Internacionalización de la Empresa española (FIEM), aprobado en la Ley 11/2010 en junio de ese año; por otro, la aprobación, en octubre de 2010, de la Ley del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode) 36/2010.

Este compromiso respondía a una demanda secular del sector de la cooperación al desarrollo. Por un lado, las recomendaciones de los informes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), de la OCDE 2002 y 2006, sobre la necesidad de corregir el excesivo peso de la ayuda ligada reembolsable en la cooperación española y la presencia de intereses comerciales de la empresa española en un instrumento que computa como ayuda oficial al desarrollo. Estas recomendaciones del CAD, expresamente dirigidas a la política de cooperación española, no hacen sino analizar las recomendaciones de la OCDE en materia de desvinculación de la ayuda de 2001¹ en el contexto de la cooperación española. Por otro lado, la necesidad de corregir el excesivo peso de la ayuda ligada reembolsable en la cooperación española y la presencia de intereses comerciales en un instrumento que computa como ayuda oficial al desarrollo era una exigencia recurrente de la sociedad civil como se deriva de, entre otros, los informes de Intermón Oxfam² o de los trabajos de expertos en el ámbito de la cooperación española, y queda patente en los múltiples debates que dieron como resultado la tramitación de la Ley Reguladora de la Gestión de la Deuda Externa 38/2006.

Con la reforma de la Ley del FAD se reforma un instrumento que se concibe inicialmente en 1976 con el propósito fundamental de fomentar la internacionalización de la economía española, aumentar la capacidad exportadora de las empresas españolas y el acceso a nuevos mercados en países en vías de desarrollo. Era un instrumento adaptado a ese contexto político y económico concreto, que intentaba conciliar los objetivos de desarrollo del

FAD con los objetivos exportadores y de internacionalización de la empresa española, y en la ausencia de una política de desarrollo con objetivos definidos ni adscrita a una agenda internacional de desarrollo.

La reforma de la Ley del FAD supone el nacimiento de dos instrumentos diferenciados, dirigidos a los distintos objetivos que convivían en el mismo. Por un lado, se crea el nuevo Fondo para la Internacionalización de la Empresa española (FIEM) aprobado por la Ley 11/2010 y gestionado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Por otro lado se crea, en octubre 2010, el Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode) gestionado por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional con el objetivo único de contribuir al desarrollo y a la lucha contra la pobreza.

El nuevo Fonprode aborda distintos objetivos, tal como se presenta en el propio preámbulo de la Ley.

El primero de ellos nace en un contexto de debate en el año 2008, en el seno del Consejo de Cooperación, acerca de cómo conciliar los patrones de crecimiento de los niveles de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta el objetivo del 0,7 por 100 y mantener criterios de eficacia en la gestión. El Consejo de Cooperación en su informe de seguimiento PACI 2008, de diciembre 2007³, se plantea la problemática de que los mecanismos de la cooperación española han quedado obsoletos para asumir volúmenes crecientes de AOD en un patrón de escalada hacia el 0,7 por 100, no siendo posible gestionar dicho incremento en términos de eficacia y eficiencia. La creación del Fonprode se plantea para responder a esta necesidad.

Por otro lado, el Fonprode también se plantea como un nuevo instrumento al servicio de la política de desarrollo que debe responder a las exigencias de la evolución de la Agenda de Desarrollo internacional. Las directrices de la agenda de eficacia de la ayuda, derivadas de la Declaración de París en 2005 y Accra en 2008, marcan un nuevo esquema de hacer política de desarrollo basado en el con-

¹ Recommendation to Untie Official Development Assistance to the Least Developed Countries (DAC High Level Meeting, April 2001); DAC Recommendation on Untying ODA, DAC OECD, julio 2008.

² Renovarse o morir. Informe de Intermón Oxfam, marzo 2006.

³ <http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Cooperación%20española/Publicaciones/INFORME%20CCD%20PACI%202008.pdf>

cepto de asociación con los países en desarrollo; una asociación basada en la apropiación de los países socios (receptores) de sus propios procesos de desarrollo, y donde se busca potenciar sus capacidades para la planificación y ejecución de sus propias políticas mediante el alineamiento de nuestras propuestas con sus objetivos de desarrollo; esto implica que nuestra AOD va a engrosar los presupuestos públicos de los países con los que cooperemos cuando se den las condiciones necesarias para ello, y se va a ejecutar por los canales administrativos de los mismos. Este esquema de apoyo presupuestario para lograr la máxima eficacia en logros de resultados de desarrollo requiere reforzar, además de nuestra capacidad de planificación, nuestra capacidad administrativa y de ejecución, y dotarnos de instrumentos que puedan responder, en tiempo y forma adecuada, a las exigencias de desembolso y rendición de cuentas que imponen estos esquemas de asociación y alineamiento. Para responder a estos requerimientos de eficacia y calidad de la ayuda, era necesaria una reforma de los instrumentos, y el Fonprode permite esa agilidad en la gestión presupuestaria para responder a estos nuevos patrones de ejecución.

No obstante la esencia fundamental de la Ley del Fonprode, tal como queda recogida en su artículo 1, es que el Fonprode nace con la finalidad exclusiva de: «la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades e inequidades sociales entre personas y comunidades, la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos y la promoción del desarrollo humano y sostenible en los países empobrecidos».

Tanto la ley como su reglamento, aprobado en julio 2011, inciden en que la esencia de este fondo es su carácter de instrumento al servicio de la política de cooperación al desarrollo. Se trata, por tanto, de un instrumento para la gestión de la ayuda oficial al desarrollo, no ligado a los objetivos de otras políticas, que debe estar orientado y gestionado para el logro de resultados en el marco de los objetivos estratégicos de la política de desarrollo establecidos en sus documentos de planificación: Plan Director, Marcos de Asociación País y Estrategias Sectoriales.

Por tanto, este instrumento debe funcionar sobre estos esquemas de planificación, y debe integrarse en los análisis y diagnósticos de la política de desarrollo para formar parte de una estrategia coherente con el resto de instrumentos de la cooperación española; de esta manera se contribuirá a lograr la deseada complementariedad de instrumentos con el propósito de impactar con mayor eficacia en los objetivos estratégicos establecidos. Se deriva de lo anteriormente expuesto otra característica esencial del Fonprode: el carácter de instrumento no ligado, desvinculándose, por ley, de los intereses comerciales y de la financiación de la empresa española, objetivos de otra política pública al servicio de la cual se ha creado el Fondo para la Internacionalización de la Empresa española, derivado también de la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Dado que la política de desarrollo concebida en el III Plan Director (2009/2012) está basada en los postulados de la eficacia de la ayuda, según lo establecido en la Declaración de París y Accra, y se orienta al logro de resultados de desarrollo, el Fonprode también debe asumir esta orientación como instrumento al servicio de esta política y deberá reportar sobre los resultados obtenidos más allá de su mera ejecución presupuestaria.

Las operaciones deben servir de apoyo al tejido productivo de los países socios, fomentando las distintas pequeñas y medianas empresas y organizaciones de la economía social de capital de origen local, generadoras de empleo digno y con un enfoque de género que contribuya al desarrollo mediante el fomento de un crecimiento inclusivo que contribuya a la cohesión social y al acceso a renta a través del empleo y el emprendimiento de los más pobres.

El Reglamento de desarrollo de la Ley 36/2010 del Fondo para la Promoción del Desarrollo incorpora una modificación del estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), por la cual el Fonprode se gestionará desde una nueva oficina con rango de Dirección, adscrita a la estructura orgánica de la AECID y que responderá estratégicamente a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI). El

órgano ejecutivo colegiado es el Comité Ejecutivo del Fonprode, presidido por la propia Secretaría de Estado y dotado de dos Vicepresidencias, la primera para la persona titular de la Dirección de la AECID, y la segunda para la persona titular de la Dirección General de Política Exterior, Europa y Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

La Ley y el Reglamento establecen los tipos de operaciones que se pueden gestionar con cargo al Fonprode; podemos agruparlas en dos tipos de operaciones fundamentalmente, unas con carácter de donación y otras de carácter financiero reembolsable.

Las operaciones con carácter no reembolsable o donación pueden ser, a su vez, de dos tipos: por un lado programas, proyectos, subvenciones de Estado a Estado que incluirían la posibilidad de articular apoyos presupuestarios permitiendo una mayor agilidad en la gestión de acuerdo a los objetivos de la propia Ley. Por otro lado estarían las contribuciones a organismos multilaterales de desarrollo financieros y no financieros: aportaciones a organismos multilaterales de desarrollo y la novedad de las aportaciones a fondos constituidos en instituciones financieras internacionales (IFI), excluyendo la posibilidad de fondos orientados sectorialmente al crecimiento económico.

El segundo tipo de operaciones que gestiona el Fonprode son las de carácter financiero reembolsable. Se asumen las operaciones de microfinanzas al desaparecer el Fondo de Concesión de Microcréditos absorbido por el Fonprode. Además, la Ley incorpora dos nuevas herramientas financieras para la cooperación española con cargo a este fondo: operaciones de deuda y de inversión. Se establece la posibilidad de financiar tanto al sector privado como al público, del país socio, a través de operaciones de deuda (préstamos, créditos o líneas de crédito), y la posibilidad de financiar pymes de capital de origen del país socio a través de la adquisición temporal de participaciones de capital de vehículos financieros de inversión.

Para la gestión de este Fondo la SECI ha firmado una encomienda de gestión con P4R en virtud de la cual

esta sociedad estatal apoyará distintas funciones clave para la buena gestión de las intervenciones, además de integrar dicha gestión de manera eficaz y funcional en la política de cooperación al desarrollo. A través de la encomienda con esta sociedad estatal, la SECI se dota de las capacidades técnicas en el ámbito financiero y legal necesarias para la gestión de las operaciones financieras reembolsables con cargo al Fonprode; asimismo se dota de las capacidades necesarias para integrar esta gestión en los procesos de planificación, gestión, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la política de desarrollo, aportando la dimensión de instrumento referida en la Ley y el Reglamento.

2. Fonprode reembolsable y no reembolsable

La ley del Fonprode establece que debe existir un límite de asignación presupuestaria que no debe exceder el 5 por 100 de la AOD total, y que, en todo caso, serán los Planes Directores vigentes en cada momento los que determinen este límite cuantitativo de asignación al Fonprode. También establece que será la Ley de Presupuestos Generales del Estado la que anualmente fijará qué porcentaje de dotación del fondo puede ser considerado donación y por tanto tener impacto en déficit, y qué porcentaje deberá considerarse reembolsable y por tanto computable como activo financiero y sin impacto en déficit. De igual manera, establece el carácter no ligado de las operaciones y la obligación de computar todas las operaciones como ayuda oficial al desarrollo en los términos definidos por el CAD de la OCDE.

La complejidad para gestionar este variado esquema de operaciones con cargo al Fonprode se plantea desde dos puntos de vista. Uno es el hecho de que la gestión del Fonprode debe conciliar donación y ayuda reembolsable, lo que supone un desafío para los esquemas de planificación estratégica de la cooperación española pues exige, a su vez, conciliar la programación multilateral y la cooperación reembolsable con coherencia y complementariedad. El desafío exigiría emplear parte del fondo de donación para complemen-

tar operaciones reembolsables y darles un componente concesional, con objeto de conseguir que las operaciones de deuda cumplan simultáneamente el criterio de elegibilidad como AOD y el criterio de operación reembolsable 100 por 100.

Según el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE para que puedan computar como AOD las operaciones de deuda, éstas deben incorporar un 25 por 100 de liberalidad (carácter de donación) respecto a una tasa de descuento uniforme del 10 por 100, independientemente de la moneda en que se conceda el préstamo. En estos términos, una operación que deba ser 100 por 100 reembolsable y computable como activo financiero en las cuentas públicas, sin componente de donación, no se podría computar como AOD.

La posibilidad de complementar en una misma operación de crédito la parte de tipo de interés nominal del mercado con un aporte en concepto de donación, de forma que suavice las condiciones del crédito y rebaje el tipo de interés real de la operación, permitiría contabilizar dicha operación como AOD. Estos mecanismos de *blending* en el caso del Fonprode, exigen la posibilidad de complementar los recursos presupuestados como donación y los que han de ser puramente reembolsables.

Por lo que respecta a las operaciones de inversión tales como la adquisición temporal de participaciones en vehículos de inversión en pymes de capital de origen en los países socios y los criterios para su cómputo a efectos de AOD en el grupo de estadísticas del CAD de la OCDE, podría decirse que están en plena evolución o no están plenamente consolidados; según estos criterios sería posible computar como AOD una operación si se invierte en tramos donde se asuma un mayor riesgo de la inversión respecto a otros tramos donde podrían acceder otro tipo de inversores, con criterios preferentes de exigibilidad sobre el reparto de las rendimientos generados por la inversión.

Por tanto, si se garantiza que con la inversión se asumen unos riesgos que no serían asumibles por el sector privado y se genera un efecto llamada, apalancando in-

versión privada en las operaciones, estas operaciones sí se pueden computar como AOD. El CAD exige, por tanto, que estando estructurado el capital en tramos, se invierta en los tramos llamados de *first loss*, donde se asume el mayor riesgo.

No obstante, la Intervención General de la Administración del Estado cuando analiza las operaciones con carácter previo a que se eleven para su aprobación al Comité Ejecutivo del Fonprode, debe garantizar el carácter pleno reembolsable de la operación; en este sentido considera que la inversión en los tramos de capital *first loss* tienen un porcentaje de riesgo excesivamente alto y deben ser provisionadas como gasto, no permitiendo, por tanto, que se contabilice como reembolsable sin impacto en el déficit público. Únicamente considera con carácter de reembolsable la inversión en los tramos *mezzanine* y tramos de deuda senior, con riesgo menor y mayor preferencia en el retorno de los rendimientos.

Contrariamente el CAD de la OCDE no considera a estos dos últimos tramos como AOD, por tanto estamos ante el dilema de poder ejecutar operaciones de inversión. De tal manera que los fondos de inversión donde sí es posible participar, hasta que no se flexibilice alguno de estos criterios, son aquellos en los que el capital no está estructurado en tramos, en los que todos los accionistas parten con las mismas condiciones.

Otra reflexión sobre la funcionalidad de la gestión del Fonprode reembolsable, se deriva de la obligatoriedad de demostrar el carácter reembolsable de todas y cada una de las operaciones de manera individual. El reglamento del Fonprode establece que la Intervención General de la Administración del Estado informará de la consideración como activo financiero de cada operación, con carácter previo a su aprobación por el Comité Ejecutivo del Fonprode. Esto impide una gestión global de la cartera de operaciones con cargo al Fonprode, donde exista la posibilidad de garantizar la rentabilidad global de la cartera con una mayor autonomía en la selección del portafolio de operaciones, conciliando algunas de carácter más concesional, pero de mayor interés por su potencial impacto en desarrollo, con otras

más atractivas por su rentabilidad (dentro de los términos de la Ley y el Código de Financiación); el resultado de la cartera global debería siempre presentar una diversificación de riesgos adecuada y una sostenibilidad del valor de los activos, si bien esta gestión sería más atractiva, sin duda, a la hora de identificar operaciones alineadas con las estrategias de la cooperación española.

Es necesario, por tanto, un debate sobre la funcionalidad en la gestión de este fondo de reciente creación que supone una lógica de cooperación novedosa no sólo dentro de la estructura de la política de cooperación española (en un sentido pleno que incorpora a los ministerios competentes en la gestión del Fonprode), sino también en el seno del CAD de la OCDE respecto a la manera de computar estos flujos y su impacto en desarrollo.

El Foro de alto nivel de Busan, celebrado en diciembre 2011, marca los términos en los que ha de evolucionar una agenda de desarrollo que se va conformando desde París y Accra, entre otros foros. El principal desafío que plantea esta agenda es la consolidación de una Asociación Global por el Desarrollo⁴, donde el sector privado tiene un papel fundamental, y este tipo de instrumentos financieros reembolsables adquieren una relevancia especial por operar fundamentalmente en el sector privado y su impacto en desarrollo. Una profundización en los lugares comunes, que para la agenda de desarrollo presentan las instituciones financieras de desarrollo y viceversa, donde se debatan temas como los anteriormente expuestos de contabilización de AOD o el impacto real y potencial de estos instrumentos en los objetivos de desarrollo, complementariedad con otros instrumentos de desarrollo, sistemas de monitoreo, de evaluación, de rendición de cuentas, etcétera, son líneas de trabajo que necesariamente se han de abordar en un futuro inmediato.

3. Especificidad de la cooperación financiera reembolsable española

Otra de las características del Fonprode está vinculada a la propia especificidad del modelo español de cooperación financiera; la cooperación española se suma recientemente a un entorno de cooperaciones internacionales que cuentan con una larga trayectoria en esta materia.

Existe una industria de agencias y entidades financieras de desarrollo con tipologías diversas como el Commron Wealth Development Corporation (CDC) británico, fondo de fondos propiedad 100 por 100 del Department for International Development (DFID) (autoridad en cooperación al desarrollo) pero que funciona de manera independiente, autofinanciada, gestionando una cartera de recursos con criterios comerciales en el marco de unas metas y un código ético de inversión acordado con DFID⁵.

En el caso de Francia, existe la Agencia de Desarrollo (AFD) con mandato del Banco de Desarrollo y regulada por la ley bancaria francesa, por lo que puede realizar operaciones financieras tanto con el sector público como con el sector privado. Asimismo, cuenta con una entidad financiera, Proparco, que actúa de manera independiente en la gestión, si bien con la AFD en su accionariado al 60 por 100, y financia únicamente a través de inversión en el sector privado.

Alemania cuenta con dos instituciones. Por un lado un banco de desarrollo (KfW, Entwicklungsbank) parte del gran KfW Bankengruppe, que es el principal organismo ejecutor del sistema de asistencia alemán para la cooperación financiera y representa casi el 25 por 100 de los fondos bilaterales del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). El KfW se centra en la financiación del sector público de los países socios, fundamentalmente en préstamos destinados a infraestruc-

⁴ 4th High Level Forum on Aid Effectiveness, Busan 2011, Outcome Document.

⁵ http://www.aecid.es/galerias/fonprode/descargas/Mejores_Prxticas_Instrumentos_Financiacion_-_Informe_Final_20Ene10.pdf

tura, asimismo puede gestionar donaciones incluyendo el apoyo presupuestario a los países en desarrollo. Para la financiación del sector privado de los países en desarrollo el propio KFW Bankengruppe cuenta con otra entidad financiera de desarrollo: DEG Invest; esta entidad financiera de desarrollo se autofinancia con los rendimientos de su cartera, al contrario que KFW Entwicklungsbank que parte de sus recursos le llegan vía presupuestaria.

Por tanto, los países de nuestro entorno realizan cooperación financiera de apoyo al desarrollo en base a distintos modelos, con distintos grados de propiedad por parte de las agencias de desarrollo sobre las entidades financieras de desarrollo.

Muchas de estas entidades financieras de desarrollo se agrupan a nivel internacional en torno a una red, red de Entidades Financieras de Desarrollo Europeas (EDFIs), en la que por parte de España participa Cofides, sociedad mercantil creada en 1988 con objeto de facilitar financiación a proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que exista interés español para contribuir al desarrollo de los países receptores y a la internacionalización de la economía y empresa española.

Con carácter general las EDFIs funcionan de forma desvinculada a la política de cooperación al desarrollo de los Estados, y los recursos utilizados en sus operaciones no tienen que responder a criterios de AOD a efectos de ser contabilizados como tal.

El impacto en el desarrollo de estas instituciones financieras está siendo sometido a debate desde distintos foros, como evidencian estudios como el de Overseas Development Institute (ODI)⁶, y sin duda se verá intensificado en línea con los desafíos surgidos para la Agenda de Desarrollo de la Cumbre de Busan.

En este sentido existe una interesante recomendación, realizada en el marco de un examen entre pares (*peer review*), del CAD de la OCDE a la cooperación alemana

en 2005, señalando que el hecho de que su cooperación financiera representada por KFW y DEG Invest, trabaje de forma no coordinada e independiente en la cooperación técnica de la Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) resta eficacia agregada y funcionalidad a su política de desarrollo⁷.

En consecuencia se insta a la política de cooperación alemana a mejorar la coordinación y la complementariedad entre ambas modalidades; el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo alemán (BMZ), cumpliendo con estas recomendaciones, dio un paso adelante y estableció una reordenación de competencias en la planificación y gestión de su política de desarrollo: el BMZ asume como competencia el diálogo de políticas con los países socios para el establecimiento de objetivos de desarrollo comunes con los países; posteriormente establece que su instrumento de cooperación técnica (actualmente GIZ) y su instrumentos de cooperación financiera (KFW y DEG) deben programar sus operaciones de manera que converjan en unos mismos objetivos de desarrollo, generando sinergias y complementariedades entre sí.

La política de cooperación española recoge esta clave en la definición del Fonprode al indicar expresamente que se trata de un instrumento al servicio de la política de desarrollo, que debe incidir en la consecución de los objetivos de desarrollo previamente establecidos en los documentos de planificación que le son propios: como son Planes Directores de la Cooperación Española, los Marcos de Asociación País y las Estrategias Sectoriales. Esta característica de instrumento de la política, junto al mandato de computar como AOD los recursos utilizados para su gestión, dotan al sistema de cooperación español de una especificidad respecto al resto de los sistemas internacionales que es importante resaltar.

El Fonprode se ha conformado como un instrumento que concentra un conjunto muy considerable de recursos y competencias. De esta manera puede gestionar

⁶ SINHA, BORTES y GRETTVE (2011), «Literature review of development returns to DFIs investment in private enterprises», Nathan Associates Inc. Final Report.

⁷ U:\Documentación\documentos de interés\Germany (2005), DAC Peer Review Main Findings and Recommendations.htm.

los tres grandes presupuestos de la cooperación española, a saber, la ayuda programática, la cooperación con organismos multilaterales de desarrollo y la cooperación reembolsable; si bien está orgánicamente bajo la Dirección de la AECID, responde a directrices políticas directas de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI); todos estos hechos no hacen sino evidenciar la importancia de fortalecer los procesos y marcos de planificación de la política de desarrollo, su seguimiento, evaluación y rendición de cuentas; solo de esta forma se posibilitará que la gestión de todos los instrumentos de cooperación, incluido el Fonprode, se haga de manera eficaz y eficiente, que se logre la deseada complementariedad entre los mismos y se oriente a contribuir al logro del impacto óptimo en los objetivos de desarrollo establecidos.

En el caso de no contar con unos marcos de planificación y en ausencia de complementariedad entre las distintas operaciones a cargo del Fonprode, se puede caer en un riesgo evidente de discrecionalidad en la gestión del mismo y lograr un efecto subóptimo en el logro de los objetivos de la política de desarrollo. Con el riesgo añadido del importante volumen de recursos que este fondo está llamado a gestionar.

La importancia de la complementariedad entre la cooperación técnica y la cooperación financiera, la planificación de objetivos y programación de instrumentos y recursos tanto reembolsables como de donación, su complementariedad e impacto en el desarrollo es una cuestión fundamental de debate a plantear en el seno del CAD de la OCDE, especialmente en el Marco de la Asociación Global para el Desarrollo planteada en Busan. El desafío planteado es identificar unos objetivos específicos conjuntos con cada país y abordar el esquema de asociación más idóneo, integrando al conjunto de actores e instrumentos, públicos y privados, en una agenda orientada a lograr estos objetivos. En este sentido, del Foro de alto nivel de Busan surge un documento conjunto (*joint statement*) del sector privado preguntándose cómo lograr esa necesaria complementariedad y planteando algunas propuestas.

4. Instrumento para el crecimiento inclusivo

Este nuevo instrumento financiero reembolsable de la cooperación española está orientado a fortalecer el tejido económico y productivo de los países socios, mediante el apoyo a las pymes, generadoras de empleo digno en los términos acuñados por las normas internacionales del trabajo⁸, y que favorecen entre otros el afloramiento de un tejido empresarial que contribuya a la cohesión social y al desarrollo de los países en los que opera.

Este tipo de pequeña y mediana empresa habitualmente tiene dificultades de acceso a la financiación en estos países, y es precisamente este tipo de tejido empresarial el que más capacidad de generación de empleo y de cohesión social presenta, además de capacidad innovadora, por ello se convierte en el *target* ideal para las operaciones de cooperación financiera. La microempresa dispone de recursos a través de los microcréditos y la gran empresa accede a mercados privados de capital; sin embargo, no existen los productos financieros adecuados para este *missing middle* que representan las pymes en los países en desarrollo.

Otra forma de operar orientada al crecimiento inclusivo es mediante la inversión en sectores subcapitalizados, que son activos necesarios para el desarrollo como la pequeña y mediana infraestructura productiva; se operará en estos sectores ya sea a través de operaciones de deuda o de inversiones de capital. Un sector identificado como de mayor capacidad para generar impacto en desarrollo es el sector agroalimentario, desde la producción hasta toda la cadena de transformación, distribución y exportación; otros sectores de gran impacto son las infraestructuras de energías renovables, transporte y telecomunicaciones, necesarias para dar un salto cualitativo a las matrices productivas de los países en desarrollo y con alto potencial para vertebrar el tejido económico pro-

⁸ Convenios fundamentales y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

ductivo del entorno. Lógicamente el sector de finanzas inclusivas será otro de los sectores donde más operaciones se lleven a cabo desde el Fonprode: la capacidad de proveer productos financieros accesibles al tejido económico de pymes, de captación de ahorro interno para el fomento de la inversión productiva, es otro de los impactos en desarrollo que un instrumento financiero reembolsable como el Fonprode ha de contemplar.

Los objetivos de movilizar el ahorro interno en estos países y canalizarlo a la inversión productiva, así como el efecto apalancamiento de la inversión extranjera privada para contribuir a la creación del tejido económico y empresarial de las pymes, en los países socios de la cooperación española, están presentes en la concepción de este instrumento de la política de cooperación al desarrollo.

5. Código de Financiación Responsable

El Reglamento del Fonprode establece la necesidad de definir un Código de Financiación Responsable⁹ y una metodología de gestión para la cooperación financiera responsable, con el fin de orientar este instrumento a los objetivos de desarrollo y cumplir con el carácter no ligado de la ayuda, elegible como AOD y sin impacto en déficit en el porcentaje señalado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El Código de Financiación Responsable definirá los criterios de inversión que han de regir todas las operaciones.

La Dirección de Cooperación Multilateral de la AECID, que asume en funciones las atribuciones de la oficina del Fonprode hasta que se formalice, durante el año 2010 empieza a desarrollar este Código de Financiación Responsable que posteriormente será debatido en los órganos consultivos de la cooperación española y en el grupo de trabajo de seguimiento del Plan Director y Plan Anual

de Cooperación Internacional (PACI) constituido en el seno de cooperación. Posteriormente, los resultados finales de estas discusiones, en julio de 2011, se elevan a pleno del Consejo de Cooperación donde se asume el documento por el conjunto de actores representados en este órgano consultivo máximo de la cooperación española.

Este Código de Financiación Responsable hereda las líneas directrices que establece el Reglamento del Fonprode, y establece unas premisas que deben regir todas las operaciones de financiación con cargo al Fonprode. Estas premisas son, en primer lugar, el cumplimiento de la operación con naturaleza de instrumento al servicio de la política de desarrollo, el cumplimiento de los marcos normativos de los países socios y de las normas internacionales en materia de trabajo como son los Convenios Fundamentales de la OIT y sus recomendaciones. Asimismo debe responder a una gestión responsable con criterios sociales y medioambientales, cumplir con las Directrices de la OCDE para compañías multinacionales sobre transparencia y anticorrupción, y cumplir con el mandato de no contribución a la transferencia de la titularidad de los servicios sociales básicos públicos al ámbito privado. En aquellos casos en los que ya estén privatizados se deberá contemplar que la prestación de este servicio preserve el carácter de universalidad y accesibilidad y que no provoque situaciones de conflicto en el acceso a los beneficiarios.

El Código de Financiación Responsable también define los estándares a cumplir por cada una de las operaciones con el fin de velar por el cumplimiento de estas premisas. Por un lado señala que debe cumplirse con la lista de exclusión y con las normas de desempeño social y medioambiental de la corporación financiera internacional; normas que han sido actualizadas en el 2011, incorporando la temática relativa a los derechos humanos. El profesor John Ruggie, como representante especial del Secretario General de NN UU en materia de empresas y derechos humanos, elaboró una guía de principios rectores que proporcionan un marco global para prevenir y abordar impactos adversos de los nego-

⁹ http://www.aecid.es/galerias/que-hacemos/descargas/CODIGO_DE_FINANCIACION_RESPONSABLE_vf.pdf.

cios en los derechos humanos. La actualización de las Normas de desempeño de la corporación financiera internacional, en 2011, ya incorporan compromisos de la agenda: «respetar, proteger, remediar» derivada del trabajo de Ruggie y respaldada por NN UU, tras una intensa discusión entre la comunidad humanitaria y el entorno de los negocios a nivel global.

Por otro lado, estas operaciones con cargo al Fonprode deben cumplir con la no realización de intervenciones en lugares adscritos a la lista de jurisdicciones no colaboradoras, recogidas en la lista de paraísos fiscales de la OCDE. Desde el Foro del G20 España está impulsando de manera activa el trabajo contra la evasión fiscal como requisito fundamental para el desarrollo.

Por otro lado el Código asume los principios de inversión responsable de la Plataforma Global Compact de Naciones Unidas para la Inversión Responsable (PRI), así como las recomendaciones 40+9 del grupo de acción financiera contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La carta de EURODAD (Red europea de deuda y desarrollo) sobre financiación responsable se asume también como estándar de obligado cumplimiento.

El Código de Financiación Responsable señala, de acuerdo al Reglamento del Fonprode, que adoptará una metodología de gestión que oriente todas las operaciones a un impacto en desarrollo. De acuerdo con esto, todo expediente de operación con carácter previo a su aprobación por el órgano colegiado, deberá ir acompañado de ciertos informes:

- El primero de estos documentos será un informe de evaluación *ex ante* de impacto en desarrollo. Este informe pivota sobre cuatro bloques fundamentales, siendo todos ellos parte fundamental del impacto en desarrollo, *i)* el primer bloque sería un informe sobre la viabilidad financiera de la operación; *ii)* el segundo bloque es un informe relativo a la gestión de riesgos sociales, de género y medioambientales, presentes en la operación; *iii)* en tercer lugar es necesario un informe sobre cómo la operación financiera reproduce el rol estratégico y los principios de la cooperación española, y de qué forma contribuye positivamente a sus objetivos de desarrollo; *iv)* en

cuarto y último lugar se requiere un informe sobre la adicionalidad y el valor añadido que representa la participación de la cooperación española en la operación.

- El Reglamento establece que este informe *ex ante* de impacto en desarrollo debe ir acompañado de otro informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado en términos de impacto en déficit en la economía española, verificando y calificando la operación como activo financiero reembolsable y contabilizándola en el Capítulo VIII de los Presupuestos Generales del Estado. El Reglamento establece que la Intervención General de la Administración del Estado deberá explicar, de manera transparente, los criterios para considerar una operación en el capítulo de activos financieros, si bien se interpreta que la norma aplicada es la que define Eurostat a través del Manual de cuentas SEC 95 para la contabilización del déficit público y la deuda pública.

Por tanto la IGAE realiza un análisis individual operación por operación, no de la globalidad de la cartera del Fonprode, como exponíamos al comienzo de este artículo; este hecho de nuevo plantea un debate sobre la mejora en la funcionalidad que supondría para este fondo un análisis por parte de la Intervención General del Estado de la integridad de la cartera, en su conjunto, proporcionando más flexibilidad en la gestión.

- Un tercer documento que acompaña a toda operación es un informe de riesgo e impacto sobre la sostenibilidad de la deuda, elaborado de acuerdo a lo establecido en la Ley 38/2006 reguladora de la gestión de la deuda externa. Deberá realizarse un análisis de riesgo, que incluirá las condiciones financieras y las garantías y mecanismos de mitigación. En aquellas operaciones en que se requiera aportación de garantía soberana o el endeudamiento del sector público, dicho análisis contemplará, además, el impacto sobre la sostenibilidad de la deuda en el país receptor, la alineación con las estrategias de desarrollo y políticas de endeudamiento diseñadas por el país, y las recomendaciones para la prevención del sobre endeudamiento emitidas por las instituciones financieras internacionales. Se examina por tanto, el marco de sostenibilidad de la deuda en térmi-

nos de los análisis elaborados por las instituciones financieras internacionales, e incorpora un análisis *proxy* de impacto del servicio de la deuda sobre la detracción de recursos públicos orientados a otras políticas públicas, concretamente las de servicios sociales básicos como salud y educación.

Asimismo, la propia Ley señala que no serán elegibles como países socios para realizar operaciones de deuda, los países catalogados HIPC (países pobres altamente endeudados); solamente aquellos que hayan superado el punto de culminación y de forma excepcional podrán ser objeto de estas operaciones de deuda, previo informe de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno.

Cuestión controvertida es la limitación de operaciones de endeudamiento a países HPIC, que genera polémica principalmente en el ámbito de la sociedad civil; la diatriba básicamente reside en la carga que la generación de nueva deuda soberana en países altamente endeudados puede suponer para sus procesos de desarrollo; el argumento contrario es el de considerar un doble castigo para los países HPIC, que han sobrepasado el punto de culminación, el hecho de excluirles de la financiación externa, limitando sus necesidades de apalancamiento para financiar sectores subcapitalizados necesarios para abordar sus estrategias de desarrollo.

- Un cuarto informe, que debe acompañar cada expediente de operación para su aprobación, es el relativo a los riesgos sociales y medioambientales. La Corporación Financiera Internacional establece una clasificación de distintas operaciones en función de estos riesgos. Una categoría A de alto potencial como gran infraestructura, sector de la gran minería, etcétera, exigiendo en este caso una evaluación *ex ante* del impacto que puede suponer la operación. El Código de Financiación Responsable considera como no elegibles las operaciones que pertenecen a esta categoría. Existe la categoría B que incluye actividades con relativo o moderado riesgo, que exigirían un informe, no una evaluación, de cómo se aborda la gestión de los riesgos sociales y medioambientales que implica; las operacio-

nes incluidas en esta categoría sí son elegibles en el ámbito del Fonprode.

De nuevo en este punto se plantea un debate interesante sobre el potencial impacto de un inversor institucional de desarrollo y la no posibilidad de que entre en operaciones de categoría A. El hecho de obligar por contrato a una adecuada gestión de riesgos sociales y medioambientales en la ejecución de operaciones de alto riesgo, supondría un impacto positivo en sí mismo enfrentado al coste social y medioambiental de que esas operaciones se aborden sin estos criterios por otro tipo de inversores sin este mandato.

6. Ciclo de gestión y herramienta metodológica

Otro desafío abordado para la puesta en marcha de ese instrumento es el de concretar una metodología de gestión del mismo orientada al logro de resultados de desarrollo; para ello la oficina del Fonprode en funciones define un ciclo de gestión de las operaciones financieras reembolsables:

Una primera fase de identificación de oportunidades; esta puede darse en los múltiples ámbitos del sistema de cooperación, si bien la secuencia más adecuada debería ser la que se inicia en los distintos países socios de la cooperación, articulado por las Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC) en el desarrollo de los Marcos de Asociación de la cooperación española con cada país; de esta manera se habrá de garantizar la orientación estratégica de la identificación y la adecuada complementariedad con el resto de los instrumentos de la política de cooperación española en ese esquema de planificación anteriormente aludido, convergiendo en los mismos objetivos de desarrollo. Para implementar este sistema de identificación, será necesario abordar la cuestión de capacidades en el seno de las OTC para el adecuado conocimiento y orientación de este instrumento.

Con posterioridad a la identificación se aplicarían unos criterios *sine qua non* de elegibilidad que emanan del Código de Financiación Responsable; una vez superado este filtro, se inician la diligencias debidas y la ela-

boración de los documentos preceptivos e informes para su presentación y aprobación ante el Comité ejecutivo del Fonprode y, posteriormente, ante el Consejo de Ministros.

Una vez aprobada la operación, por el Consejo de Ministros, se procede a la formalización en términos legales de los contratos de crédito e inversión, así como al desembolso, actuando el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como agente financiero. Posteriormente, se iniciará una fase fundamental de seguimiento activo que debe garantizar que la operación responde a los objetivos de desarrollo y que se preserva el carácter de reembolsable y el factor de rentabilidad, de forma que no se pierda el valor de la inversión inicial o del crédito.

Desde la oficina del Fonprode se elaboró un estudio de las diversas metodologías y estándares internacionales empleados, habitualmente, por las distintas entidades financieras de desarrollo en el sector, y por las instituciones financieras de desarrollo. Se identifican dos modelos fundamentales que se pueden considerar estándares en el sector: la metodología GPR (Corporate Project Rating) de la cooperación alemana desarrollada por la DEG alemana, y por otro lado otra metodología más extendida DOTS (Development Outcome Tracking System) que proviene de la Corporación Financiera Internacional.

Finalmente la política de cooperación española se decanta por la metodología GPR, dado que está más orientada a resultados de desarrollo y permite acompañar todas las fases del ciclo de gestión de la operación desde la identificación hasta la evaluación, siendo un estándar internacional que permite avanzar contando con el bagaje de otras entidades financieras.

No obstante es necesario hacer un esfuerzo de adaptación de esta metodología a la especificidad de la cooperación española, así como a los criterios del Código de Financiación Responsable sin romper la lógica de dicha metodología.

Esta metodología GPR funciona en torno a cuatro bloques o características de la operación correlacionadas con los cuatro bloques del preceptivo informe *ex ante* en

desarrollo. Cada uno de estos bloques otorga una puntuación a la operación.

El primer bloque es el relativo a la viabilidad financiera del proyecto a largo plazo. El segundo hace referencia al impacto y efectos sobre el desarrollo. Un tercer bloque en relación a la coherencia con el rol y los objetivos estratégicos de la cooperación española, y un cuarto bloque que recoge los aspectos relacionados con la contribución a la rentabilidad global de la cartera del Fonprode.

Este último bloque se incorpora para no romper la propia lógica de la metodología GPR (que predetermina este bloque como parte metodológica) además de ser interesante por contribuir al debate de analizar las operaciones de forma global como una gestión de cartera, como hace la DEG alemana y no de forma individualizada como está obligado el Fonprode por el Reglamento.

El primer bloque de viabilidad financiera analiza fundamentalmente unos requisitos como son: riesgo país, riesgo sectorial, riesgo de los gestores y, por último, la tasa interna de retorno de la operación bruta y ajustada a riesgo.

El segundo bloque, que versa sobre el efecto en desarrollo, considera fundamentalmente aquellos resultados que pretendemos lograr con la cooperación financiera, fundamentalmente la generación de empleo digno con enfoque de género, la generación de encadenamiento empresarial mediante la inversión en pymes, mejora en la formación y cualificación laboral, relevancia para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), contribución a la movilización del ahorro interno hacia la inversión productiva, y, por último, la aportación a la diversificación de productos financieros.

El tercer bloque, acerca de la contribución a los objetivos estratégicos de la política de desarrollo, es fundamental para responder a la propia esencia del Fonprode como instrumento al servicio de la política de cooperación española; debe ser coherente con sus prioridades geográficas y debe estar alineada con los marcos de planificación de la cooperación española al tiempo que debe cumplir con las normas fundamentales de la OIT y los requisitos de la agenda de trabajo decente.

Las operaciones deben estar orientadas a una inversión inclusiva y al crecimiento de base amplia y con impacto en reducción de la pobreza. En la metodología sí se establece una prelación de sectores, en función de los de mayor impacto para el desarrollo en el medio y largo plazo. Las pymes en general serán el objeto de la financiación por su capacidad, ya aludida, de fomento de un tejido productivo y empresarial de gran impacto en desarrollo y cohesión social; sectores como es el sector agro desde la producción, distribución hasta la transformación y la exportación, así como el sector de las TIC's, finanzas inclusivas, energías renovables o pequeña y mediana infraestructura productiva serán ponderados positivamente en la conformación del portafolio de operaciones con cargo al Fonprode reembolsable.

Otro de los retos fundamentales que se le presentan al Fonprode en su faceta financiera reembolsable es el de tener la capacidad de evolucionar su herramienta metodológica hacia una composición de cartera a medio plazo, diversificada por regiones geográficas, sectores y tipos de instrumento, que garantice la posibilidad de gestionar adecuadamente los riesgos, la sostenibilidad de la cartera y el impacto óptimo en los objetivos de desarrollo. El avance en materia de especialización sectorial y geográfica es primordial para emplear los instrumentos más adecuados en cada región y en cada sector. Para avanzar en este sentido, es fundamental profundizar en la definición de los más adecuados indicadores de desarrollo sobre el efecto, que este tipo de operaciones, logran en los objetivos de desarrollo en cada uno de los sectores. Esta especialización de las operaciones financieras como instrumentos de desarrollo en cada sector y región es un reto que deben recorrer, no solo la cooperación financiera española, sino las instituciones financieras de desarrollo en su conjunto.

Un ejemplo interesante de avance en este sentido es el trabajo encargado por la Dirección sectorial de AECID y la oficina del Fonprode al Instituto de Lucha contra el Hambre para conocer qué instrumentos de cooperación financiera reembolsable se están empleando en la lucha

contra el hambre y el desarrollo rural, como fondos semilla, fondos de capital riesgo, líneas de crédito, bancos rurales, y cuáles serían los más adecuados.

Una vez se han identificado las operaciones, la oficina del Fonprode se dota de las capacidades necesarias para el análisis financiero, legal y de desarrollo, a través de la Sociedad Estatal P4R mediante una encomienda de gestión.

P4R aplica a cada identificación los criterios de elegibilidad derivados del Código de Financiación Responsable de forma que cumplan con estos estándares en él señalados. A continuación se realiza un análisis de diligencias debidas profundizando en la normativa internacional, normas de la OIT, efectos sobre el desarrollo, expectativas de generación de empleo incluyendo perspectiva de género entre otros factores anteriormente mencionados.

Con toda esta información, una vez aplicada la metodología de GPR adaptada, P4R elabora los documentos necesarios para realizar el informe de evaluación *ex ante* con sus cuatro bloques y los demás informes, y los hace llegar a la Oficina del Fonprode que, a su vez, los eleva al Comité Ejecutivo para su aprobación.

El Comité Ejecutivo del Fonprode, en caso de aprobación, lo eleva al Consejo de Ministros y pasa a la fase de formalización de la operación. Esta fase es fundamental para corregir posibles fallos en cuanto al cumplimiento de algunos de los estándares como género, riesgo social y medioambiental, etcétera. Es el momento de incorporar elementos orientados al desarrollo mediante cláusulas legales o contractuales.

Una vez formalizada la operación, se procede al desembolso donde el ICO actúa como agente financiero. Posteriormente, se pasa a la fase de seguimiento financiero para preservar el valor de la inversión, lo que exige las capacidades necesarias para tener un rol activo en los fondos de inversión. Asimismo, se realiza un seguimiento del impacto en desarrollo para lo que es importante la colaboración de la estructura de las oficinas técnicas de cooperación en terreno. Estos informes se realizan desde P4R de forma periódica, opera-

ción a operación, si bien también debe elaborarse un informe anual de la globalidad de la cartera.

La fase final de evaluación de la operación es competencia de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) conjuntamente con la oficina del Fonprode, que deben decidir un plan bienal de evaluación y definir la metodología más adecuada. Esta última etapa es fundamental con el objetivo de cerrar el ciclo de gestión y poder evolucionar y optimizar la funcionalidad de este nuevo instrumento, generando valor agregado y actuando de forma complementaria con el resto de instrumentos que conforman la política de cooperación al desarrollo española.

7. Conclusiones

El Fonprode en definitiva nace con la inquietud básica de contribuir al desarrollo y a la lucha contra la pobreza, estando al servicio de la política de cooperación al desarrollo y buscando la complementariedad con los demás mecanismos de nuestro sistema y en el marco de la planificación estratégica de la cooperación española.

No obstante las posibilidades que presenta la cooperación financiera reembolsable para el impacto en desarrollo se pueden analizar desde muchos vectores. El primero y fundamental es el desafío que nos plantea la Agenda de Desarrollo post Busan, donde se propone una asociación global para el desarrollo que incorpore al sector privado como motor fundamental para el desarrollo; un crecimiento inclusivo, de base amplia, con capacidad de generación de desarrollo y que incorpore a la base de la pirámide en su generación y en el beneficio directo de este crecimiento, es un desafío que implica a todos los actores globales. Las políticas de desarrollo y, en este concepto, el papel de las instituciones financie-

ras de desarrollo, deben actuar como catalizadores de un crecimiento de este tipo y ser capaces de crear los incentivos adecuados para que el sector privado se incorpore íntegramente a estos procesos operando positivamente sobre el desarrollo. En definitiva, Busan nos plantea un reto de coherencia de políticas, ya no solo públicas, sino públicas y privadas, con los objetivos de desarrollo.

Este desafío afronta el Fonprode, sumándose a un desafío que, como queda expuesto a lo largo del trabajo, implica a distintos niveles al resto de instituciones financieras de desarrollo, al CAD de la OCDE, a la sociedad civil, al resto de políticas públicas de las Administraciones de los Estados y, ahora más que nunca, al sector privado a nivel global, para el logro de los objetivos de desarrollo y la lucha contra la pobreza.

Referencias bibliográficas

- [1] ALONSO, J. A. y FITZGERALD, V. (2003): *Financiación del desarrollo y coherencia en las políticas de los donantes*, ICEI.
- [2] DALBERG (2009): «The Growing Role of the Development of the Development Finance Institutions in International Development Policy».
- [3] LARRÚ, J. M. (2010): *Más ¿es mejor? Reflexiones en torno a la calidad de la ayuda al desarrollo española*, Universidad San Pablo-CEU, septiembre.
- [4] MASSA, I. (2011): *Impact of Multilateral Development Finance Institutions on Economic Growth*, Overseas Development Institute, agosto.
- [5] OECD (2006): *Promoting Pro Poor Growth. Infrastructure*.
- [6] OECD (2006): *Promoting Pro Poor Growth. Agriculture*.
- [7] OECD (2006): *Promoting Pro Poor Growth. Private Sector Development*.
- [8] SINHA, S.; BORTES, C. y GRETTVE, A. (2011): *Literature Review of Development Returns to DFIs Investment in Private Enterprises*, Nathan Associates Inc. Final Report.